



RED  
LATINOAMERICANA  
SOBRE LAS  
INDUSTRIAS  
EXTRACTIVAS

BOLETÍN INFORMATIVO N°3 / 2021

## ¿Por qué el mundo necesita de una transición energética? y ¿cuál es el rol de la sociedad civil?

*Es imposible hablar de transición energética sin abordar la crisis estructural, sistémica, global y de carácter extraordinario en la que nos encontramos.*

Foto: [www.elperiodicodelabre.org](http://www.elperiodicodelabre.org)

RED LATINOAMERICANA SOBRE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS - RLIE  
[www.redextractivas.org](http://www.redextractivas.org)

## INTRODUCCIÓN

El Seminario Internacional *¿Por qué el mundo necesita de una transición energética? y ¿cuál es el rol de la sociedad civil?*, realizado el 24 de julio del 2020 con el auspicio de la red Publiquen lo que Pagan (PWYP, por sus siglas en inglés) y la Red Latinoamericana de Industrias Extractivas (RLIE), organizado por el CEDLA como coordinador de la RLIE, constituyó un espacio de diálogo propositivo y crítico sobre la importancia y necesidad de una transición energética en la región, y cómo los actores sociales tienen un rol vital en ese proceso.

PWYP presentó un documento de consulta a los diferentes países, el que destaca:

- Alentamos a todos los países a continuar planificando la transición energética, ya que la dependencia económica a largo plazo de la producción de combustibles fósiles es altamente arriesgada y posiblemente acabe provocando dificultades en las comunidades, regiones y naciones que dependen de ella.
- Reconocemos que la transición energética ya está muy avanzada y exigimos que se dé prioridad durante ella a las comunidades que fueron marginadas históricamente, incluyendo las que hayan sufrido las consecuencias más graves de la extracción de recursos.
- Reconocemos que las industrias extractivas no siempre derivaron en una reducción de los índices de desigualdad y pobreza en los países ricos en recursos y que muchas veces impactan de forma drástica a nivel social y ambiental sobre la vida y la situación de pobreza de las mujeres y los hombres.
- La extracción de minerales, necesaria para la transición energética, no debería convertirse en otra maldición de recursos para estas comunidades.
- Es imprescindible proteger a los trabajadores y a las comunidades durante la transición energética en curso.

### ¿Qué evita poner manos a la obra?

El académico peruano Carlos Monge de Natural Resource Governance Institute (NRGI), que presentó la posición de PWYP, señaló que la transición energética supone “conocer bien los actuales eslabonamientos económicos de

las actividades extractivas” e “implica también, tener listos planes de diversificación económica para esos territorios, para que se generen empleos e ingresos alternativos”.

Entre los aspectos que destaca Carlos Monge, son las dificultades que tienen que ver con “la captura del Estado, de la política, de las políticas, pues los intereses empresariales controlan las decisiones que toman los gobiernos”. Igualmente, las corruptelas, debido a que “los funcionarios públicos toman decisiones favorables a las empresas a cambio de pagos y otras formas de corrupción”.

En torno a ello detectó cinco ausencias: demandas ciudadana y empresarial por energías baratas que alimentan un populismo energético; incentivos políticos inmediatos que alimentan continuidad de producción petrolera; deuda pagadera en recursos petroleros que crea una camisa de fuerza haciendo difícil el cambio, particularmente en Venezuela y Ecuador; y, carencia de visiones alternativas y hegemonía de narrativas petroleras en la población.

Las sugerencias de Monge en torno a áreas de trabajo inicial para PWYP se refirieron a gobernanza y captura política, financiación y justicia económica para una transición energética igualitaria, transparencia y participación pública. También, adaptación de las poblaciones que más sufren el impacto del calentamiento global y protección de los sumideros de carbono (bosques primarios) y de los recursos ya afectados por calentamiento global (agua, océanos, arrecifes de coral).

Sobre la prioridad en la transición energética para comunidades marginadas, dijo que se debe definir con más claridad cuál sería una buena gobernanza para ese objetivo; y que pueblos indígenas y otras comunidades étnicas y locales deben ser consultados, participar y beneficiarse.

“Las poblaciones locales no pueden ser víctimas de la transición”, señaló, citando los ejemplos de Oaxaca, México y la Guajira colombo-venezolana.

Respecto de la actividad minera para abastecer la transición energética “sin maldición de recursos”, abogó por “precisar más cómo se logra esto y qué tipo de gobernanza de la minería crítica para la transición necesitamos”.

### **El mundo necesita que PWYP se involucre**

De acuerdo con Monge, la red global puede contribuir desde su experiencia en la lucha por transparencia, aunque corre dos riesgos: encerrarse en un nicho

muy específico (sólo la transparencia) y quedarse fuera de los grandes debates sobre alternativas de políticas públicas mundiales y nacionales.

“PWYP puede contribuir a la crítica de las políticas públicas en marcha y la incidencia por otras mejores. Los riesgos son ampliar la agenda y perder especificidad, actuar en campos en los que ya lo hacen otros organismos y afrontar la falta de capacidades”.

Remarcó que es necesario ubicar la transición energética en el marco de solución general a la crisis ambiental global, que supone cambio en patrones de producción y de consumo, y tomar nota del impacto, sobre ese cambio, de la crisis generada por la necesidad de controlar el coronavirus.

### Por qué el mundo necesita una transición energética y por qué para conseguirlo necesita a PWYP

La COVID-19 nos está afectando a todos. Está cambiando cómo vivimos. Redefine los debates de las políticas. Cambia mercados. Muchas comunidades están haciendo frente a la COVID-19 inmersas en un clima de crisis.

Por ello, ahora más que nunca, debemos unirnos y enviar un mensaje claro a nuestros gobiernos para construir el mundo que queremos para nuestros hijos y sus comunidades. Como PWYP, debemos definir cómo superar esto juntos y redefinir un mejor futuro para todos.

El objetivo es describir por qué el mundo necesita una transición energética, incluyendo una reducción controlada de la producción de combustibles fósiles y cómo las coaliciones de PWYP pueden tener un rol vital en ello.

Algunas declaraciones de posición que PWYP podría sopesar adoptar a nivel global para garantizar una transición justa:

- Resulta necesario hacer una reducción controlada de la producción de combustibles fósiles. Esto incluye cancelar de inmediato toda la exploración, el desarrollo y la producción de combustibles fósiles en ciertos países y una reducción gradual de su producción en todos los países del mundo.

- La reducción gradual de la producción de combustibles fósiles debería tener lugar a través de acciones inmediatas de los países ricos y especialmente los que históricamente contribuyeron a la mayoría de las emisiones globales.

PWYP, mayo de 2020

## COMENTARIOS AL DOCUMENTO POSICIÓN: ¿POR QUÉ EL MUNDO NECESITA UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y POR QUÉ PARA CONSEGUIRLO NECESITA A PUBLIQUEN LO QUE PAGAN?

*Flavia Liberona,  
Directora Ejecutiva  
FUNDACION TERRAM  
Chile*

Mas allá de hacer un diagnóstico sobre la dramática situación que afecta al planeta respecto a la crisis climática y la pandemia generada por el COVID 19, consideramos que es muy importante que la mayor cantidad de personas y organizaciones en el mundo se sumen en una campaña cuyo propósito sea el reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), promoviendo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas que está en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

Pues, según las estimaciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), desde 1896 a la fecha existen emisiones acumuladas en la atmósfera del orden de 2200 GtCO<sub>2</sub>eq, sin embargo, para que la temperatura del planeta no supere un aumento de más de 1,5°C, las emisiones mundiales al año 2050 no deberían sobrepasar las 420 GtCO<sub>2</sub>eq. Esto implica que se debe frenar en forma rápida la utilización y quema de combustibles fósiles en todo el planeta.

En ese sentido es clave el rol que puedan jugar los estados en planificar una transición energética, que sea ambiciosa en sus objetivos y a la vez justa. Esta significa garantizar el respeto a los derechos humanos, para las comunidades indígenas y poblaciones locales que hoy día están siendo afectadas por proyectos contaminantes, como es el caso de las llamadas Zonas de Sacrificio en Chile en las cuales existe una concentración de centrales termoeléctricas a carbón y gas junto a otros proyectos contaminantes como son fundiciones de cobre, las cuales han afectado su salud y calidad de vida durante años.

Adicionalmente nos preocupa el rol que puede tener el gas como principal combustible usado en la transición, ya que en la actualidad este está siendo obtenido mediante la utilización de técnicas altamente contaminantes como es

el *fracking*. Esto ha llevado a que hoy existan muchos conflictos en la región de Latinoamérica debido a la extracción y utilización de gas obtenido por *fracking*, lo que además en nada ayudaría a disminuir las emisiones de GEI.

Desde Fundación Terram, nos preocupa que se promueva una transición energética fundada en un nuevo extractivismo (litio, cobre, cobalto, tierras raras, entre otros), es decir que se promuevan cambios tecnológicos para las economías más desarrolladas a costa de países en vías de desarrollo como Chile, el cual es el primer productor de cobre a nivel mundial y un importante productor de litio. La transición energética no puede convertirse en la maldición de los recursos naturales, considerando la situación de la región de Latinoamérica como proveedores de insumos estratégicos (litio, cobre, cobalto, entre otros) para la transición energética global. Se deben implementar métodos de extracción menos dañinos para el medio ambiente y las comunidades locales.

Consideramos que PWYP, puede jugar un rol importante en promover una transición energética justa que anime a los tomadores de decisiones a establecer mecanismos de transparencia respecto de los impactos de las emisiones GEI de las industrias extractivas en todo su proceso productivo, así como a promover la incorporación de consideraciones climáticas en la evaluación ambiental y en el desarrollo de proyectos. También creemos que puede resultar un gran aporte el impulsar a los gobiernos a establecer presupuestos nacionales y subnacionales para afrontar la crisis climática y la transición energética, entre otras medidas.

---

## **A CONTINUACIÓN, SE PRESENTA INFORMACIÓN SOBRE CHILE Y COMO ESTÁ AFRONTANDO EL ESCENARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA**

Chile es un país extremadamente vulnerable a los efectos del cambio climático, pues cumple 7 de los 9 criterios establecidos en el artículo 4.8 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) esto debido a que posee: i) áreas costeras de baja altura; ii) zonas áridas y semiáridas; iii) zonas de bosques; iv) territorio susceptible a desastres naturales; v) áreas propensas a sequía y desertificación; vi) zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica y vii) ecosistemas montañosos.

Si bien las emisiones de Gases de Efecto invernadero (GEI) son marginales en el contexto mundial, estando por debajo del 0,3%. Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 1990-2016: el año 2016 las emisiones totales fueron superiores en un 114,7 % si se las compara con las del año 1990, y un 7,1 % más que emisiones del año 2013. El principal gas emitido es el dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) con un 78,7%, seguido por el metano (CH<sub>4</sub>) con un 12,5%. El sector Energía es el principal emisor de GEI con un 78% de las emisiones totales el año 2016. Esto es muy importante debido a que es este el sector que más ha incrementado sus emisiones en el tiempo pasando 33.697,7 Gt de CO<sub>2</sub>eq en 1990 a 87.135,6 Gt de CO<sub>2</sub>eq en 2016, lo que significa un incremento de un 137,5 % desde 1990 y un 16,6% desde el año 2013. Según el informe antes citado<sup>1</sup>, la subcategoría **industria de la energía** donde se encuentra la producción de electricidad y calor, incrementó sus emisiones en 511,1 % desde el año 1990 al 2016 y 7,9 % desde el año 2013. Por su parte para el sector Minería las emisiones de GEI se incrementaron en 109,7% desde 1990 y en un 34,5% desde el año 2013<sup>2</sup>. Este incremento se debe al crecimiento sostenido de la extracción de cobre.

Por otra parte, en términos de las emisiones per cápita, estas aumentaron enormemente, ya que en 1990 eran de 2,48 tons/hab/año y en 2018 fueron de 5,1 tons/hab/año<sup>3</sup>, lo cual acerca a Chile a las emisiones *per cápita* de las economías de mayores ingresos. Este incremento está relacionado con el crecimiento económico del país y la alta dependencia de combustibles fósiles, especialmente del carbón.

Además, existen indicadores mundiales que nos señalan la vulnerabilidad del país a los efectos del Cambio Climático, entre los cuales se encuentra: el Índice de Riesgo Climático Global de 2017, el cual ubicó a Chile en el lugar 10. Y según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) Chile encabeza la lista de países con riesgo alto de sufrir estrés hídrico<sup>4</sup>, siendo el de mayor riesgo en Latinoamérica y el número 18 a nivel mundial.

En términos de política pública climática cabe señalar que, en abril de 2020, Chile entregó la actualización de su Contribución Nacional Determina-

---

1 Tercer informe bienal de actualización de Chile sobre Cambio Climático, 2018, pág. 88

2 Ibid., pág. 89

3 <https://datosmacro.expansion.com/energia-y-medio-ambiente/emisiones-co2/chile>

4 <http://www.infraestructurapublica.cl/chile-encabeza-grupo-paises-riesgo-alto-sufrir-estres-hidrico-segun-ultimo-ranking-del-instituto-recursos-mundiales/>

da (NDC) ante la Comisión Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), documento en el que se compromete a alcanzar la carbono neutralidad el 2050. Adicionalmente en enero de 2020, el gobierno ingresó al parlamento un proyecto de ley Marco sobre Cambio Climático el cual está siendo tramitado en el senado. Además, Chile ha iniciado el proceso de elaboración de la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), establecida en el artículo 4.19 del Acuerdo de París. Esta ECLP debería definir los objetivos, directrices y lineamientos de largo plazo que seguirá el país de manera transversal e integrada, considerando un horizonte a 30 años, para hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático; transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de los mismos; reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático; y, dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia.

---

## **ANTECEDENTES DE LA MINERÍA EN CHILE, NUEVO BOOM DE MINERALES ESTRATÉGICOS**

En términos generales la región de América Latina, presenta una gran abundancia de diversos minerales (litio, cobre, plata y níquel, entre otros) que son muy relevantes para la transformación energética global. Por su parte Chile es el principal productor de cobre de mina a nivel mundial y al año 2018 el país poseía las mayores reservas de cobre en el mundo (23% de las reservas globales). La producción anual de cobre es del orden de 5,8 MM de toneladas, lo cual representa el 29% de la producción mundial. Sin embargo, existen múltiples problemas asociados a la producción del metal rojo, los que van desde conflictos con comunidades locales hasta el bajo aporte que realiza la gran minería del cobre a las arcas fiscales.

Dentro de los problemas territoriales podemos señalar que la mayor producción de cobre actualmente proviene de la zona norte del país, donde existe baja densidad poblacional y una enorme carencia estructural de recursos hídricos, que es un insumo fundamental para la producción minera. Esto ha incidido en que la industria busque formas alternativas para satisfacer la demanda de agua en los procesos productivos, tales como el tratamiento de las aguas utilizadas

y su recirculación, pero también esto ha llevado a desarrollar e implementar como una solución para esta industria, la instalación de plantas desaladoras de agua de mar, así como también a innovaciones en los procesos tecnológicos que permiten la utilización de agua de mar sin desalar.

El problema de la gran minería del cobre durante años ha utilizado el agua de fuentes naturales y destruido glaciares, dejando a las comunidades locales

**La industria minera no goza de gran prestigio al interior del país, ya que sus conductas no son respetuosas de las comunidades locales ni del medio ambiente.**

sin el acceso adecuado al vital elemento, esto se refleja en la cantidad de conflictos socioambientales entre las empresas mineras y las comunidades locales. Con la llegada de las plantas desaladoras el escenario no ha mejorado, pues estas se ubican en la zona costera y por tanto entran en conflictos con otras actividades, como es la pesca artesanal. Además, los procesos de desaliniza-

ción de agua consumen una gran cantidad de energía y generan desechos como las salmueras que impactan negativamente en el medio ambiente.

Debido a esto, la industria minera no goza de gran prestigio al interior del país, ya que sus conductas no son respetuosas de las comunidades locales ni del medio ambiente, a lo que se suma el hecho de que la legislación minera y ambiental opera en favor de los grandes consorcios empresariales, dejando desamparadas a las comunidades locales e indígenas.

Por otra parte, la explotación de Litio que también se realiza en la zona norte del país, genera múltiples preocupaciones, pues como es sabido, Chile se ubica dentro de los principales productores de Litio a nivel mundial, con una producción de 80.417 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) al año 2017. Según la información proporcionada por la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) se proyecta una producción de 240.000 toneladas de LCE para el año 2022<sup>5</sup>.

Hasta ahora la producción chilena de litio proviene de las explotaciones en el Salar de Atacama, el cual alberga cerca del 50% de las reservas mundiales

5 <https://www.cochilco.cl/Mercado%20de%20Metales/Informe%20Litio%209%2001%202019.pdf>

de Litio en forma de sales. Esto genera una alta presión hídrica sobre el Salar, dado que para producir una tonelada de litio se eliminan (por evaporación) aproximadamente cerca de dos millones de litros de agua<sup>6</sup>. Debido a la alteración de los complejos y desconocidos sistemas hidrológicos existentes en el salar de Atacama, actualmente existen comunidades indígenas que ven alterada su forma de vida.

En este sentido resulta muy relevante poder realizar un análisis de lo que efectivamente representa para el país el aumento de la demanda de ciertos minerales considerados estratégicos para la transición energética en un contexto de cambio climático, donde uno de los principales impactos a nivel local está relacionado con la disponibilidad de agua para consumo humano.

---

## CHILE Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

En junio de 2019, se dio a conocer el Plan de Retiro Voluntario de Centrales a Carbón, el cual consiste en un acuerdo voluntario entre empresas y gobierno para apagar por etapas las 28 unidades termoeléctricas a carbón entre el año 2019 y el año 2040. Además, en un inicio se estableció un cronograma para cesar el funcionamiento de las primeras ocho unidades (2019-2024), las 20 unidades restantes en principio se mantuvieron sin fecha de cierre. Luego, en diciembre de 2019, se sumaron dos unidades que serán apagadas antes del año 2024 y en mayo de 2020 la empresa Enel anunció su intención de parar las operaciones de dos unidades antes del año 2024. La mayoría de estas centrales termoeléctricas han estado operando por más de 25 años y un par de ellas superan los 50 años en funcionamiento.

Sin embargo, el Plan de Descarbonización, no ha estado exento de críticas al interior del país, pues a pesar de que parece un importante avance, no contempla el cierre definitivo y desmantelamiento de las centrales térmicas apagadas. Ya que existe un mecanismo denominado Estado de Reserva Estratégica, el cual permite que las unidades termoeléctricas sigan funcionando entre 2 a 5 años después del llamado “cierre”, pudiendo incluso reactivarse en caso de necesidad.

---

6 Carrere, M (2018). Explotación de litio en Chile: Estado renueva contrato a empresa infractora ambiental. MONGABAY, 31 de octubre de 2018. Consultado 15 de agosto de 2020. Disponible en: <https://es.mongabay.com/2018/10/explotacion-de-litio-en-chile-estado-renueva-contrato-a-empresa-infractora-ambiental/>

Además, las centrales en teoría cerradas podrían eventualmente ser transformadas para utilizar como combustible gas. Esto sin duda ha generado desconfianza en la veracidad de este plan.

A esto hay que agregar que desde el año 2017 en Chile se aplica el denominado **impuesto verde**, que tiene como propósito grabar las emisiones de fuentes fijas y que se aplica fundamentalmente a las emisiones de las centrales termoeléctricas. Este impuesto ha sido muy criticado por el bajo valor del gravamen, 5 dólares la tonelada de dióxido de carbono.

En definitiva, si bien Chile presenta algunos avances en la transición energética, estos aún están lejos de encaminar al país hacia una economía baja en emisiones, lo que es más dramático, estas medidas no van encaminadas a solucionar numerosos conflictos socioambientales, como tampoco problemas estructurales que tiene el país en relación a los efectos del cambio, la destrucción de glaciares por la industria minera y la creciente demanda de agua para abastecer procesos industriales en desmedro de las poblaciones humanas locales.

## DESAFÍOS PARA UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA UNA MIRADA DESDE BOLIVIA

*Silvia Molina Carpio*  
*Investigadora*  
*CEDLA*  
*Bolivia*

La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030<sup>7</sup> y el Acuerdo de París<sup>8</sup> han establecido la necesidad de una ruta hacia economías bajas en emisiones y resilientes al clima. Estos retos fundamentales se complementan con el establecimiento de metas de adaptación a los efectos adversos del cambio climático, fortalecimiento de la resiliencia y reducción de la vulnerabilidad, y lograr que el financiamiento sea consistente con las metas globales de mitigación y adaptación. El objetivo esencial es limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 °C.

En ese marco, los debates sobre la necesidad de una transición energética van tomando cada vez más atención en el mundo y también en América Latina. A partir del 2015, cuando diversos países de la región firmaron el Acuerdo de París en la 21<sup>a</sup> Conferencia de Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), el objetivo de reducir paulatinamente la dependencia de fuentes energéticas primarias como el petróleo, el carbón o el gas natural y al mismo tiempo la promoción de energías renovables y alternativas, formaron parte de las medidas que se impulsaron para mitigar los efectos del cambio climático.

Cuatro años después, en la 25<sup>a</sup> conferencia de las partes de la CMNUCC, COP25, bajo la presidencia de Chile, la Comunidad Internacional esperaba que la mayor parte de los países dieran respuestas a las evidencias que la ciencia viene alertando sobre el cambio climático, abordando, entre otras, medidas específicas hacia una transición energética. En ese sentido, las palabras de Patricia Espinosa, Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC resaltaban esa importancia: “La rápida transición hacia la energía limpia es crucial para alcanzar el objetivo principal del Acuerdo de París sobre el cambio climático, que es mantener el

---

7 <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/>

8 <https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris>

aumento de la temperatura media mundial lo más cerca posible de 1,5 grados centígrados”.<sup>9</sup>

Si bien es evidente que hay un consenso mayoritario de la necesidad de sustitución de combustibles fósiles por fuentes renovables y sustentables, en los hechos el recorrido de una transición energética se enfrenta a múltiples y profundos desafíos. Por una parte, no es posible referirnos a una sola transición energética, sino más bien a las diversas formas y tiempos o velocidades de estas transiciones, teniendo en cuenta las particularidades de cada región y país. Por otra, abordar la descarbonización energética no resulta suficiente para enfrentar el calentamiento global y sus consecuencias

**Nos encontramos frente a la urgencia de abandonar gradualmente el modelo energético dependiente de los combustibles fósiles y la necesidad de adoptar patrones de producción, distribución y consumo energético sustentables.**

sin que en ese proceso se enfrenten las desigualdades sociales, económicas y territoriales del modelo energético vigente, es decir, enfrentar las desigualdades entre grandes regiones del mundo, entre países y al interior de cada país.

Bajo este panorama, si bien las previsiones de crisis climática y efecto sobre la vida del planeta se hacen día a día más evidentes, la situación energética global muestra que no es previsible que se repitan los escenarios de las distintas transiciones energéticas del pasado expresadas en el paso de una fuente principal (de leña a carbón, luego petróleo y gas). La tendencia actual se dirige hacia el empleo de diversas fuentes de energía, por tanto, un sistema energético complejo que use de diferentes combustibles y a su vez un proceso que implica diferencias en cada sector.

Es evidente que nos encontramos frente a la urgencia de abandonar gradualmente el modelo energético dependiente de los combustibles fósiles y la necesidad de adoptar patrones de producción, distribución y consumo energético sustentables. Para este fin se requiere de políticas energéticas que reduzcan los combustibles fósiles y cualquier otra fuente que genera elevados impactos

9 Comunicado ONU Cambio Climático, 01 de agosto de 2019. IRENA y ONU Cambio Climático se unen para acelerar el uso de renovables como solución climática. <https://unfccc.int/es/news/irena-y-onu-cambio-climatico-se-unen-para-acelerar-el-uso-de-renovables-como-solucion-climatica>

negativos económicos, sociales, culturales y ambientales, como la energía hidroeléctrica a gran escala y la energía nuclear, al mismo tiempo, que el diseño y ejecución de políticas y proyectos energéticos garanticen el abastecimiento y acceso de energía a la población en condiciones de calidad y costo. Se trata de un desafío con múltiples dimensiones que se enfrenta a la evolución que ha tenido la matriz energética en América Latina y el Caribe (ALC) con predominancia de fósil y que reproduce relaciones de intercambio asimétricas y genera daño ambiental y violencia.

En ese marco, frente a la propuesta y consulta de la red de organizaciones no gubernamentales “Publique lo que pagas” (PWYP), que plantea la necesidad de la participación de la sociedad civil en las definiciones de la ruta a seguir para la transición energética global y en cada región o país, resulta de gran importancia la comprensión del escenario geopolítico y energético, complejo, pleno de incertidumbres y que demanda estrategias diversas, además, asumir acciones frente a las previsibles consecuencias sociales, económicas y políticas que van más allá del sector energético en particular; y de manera esencial, construir un modelo energético justo, es decir, no sometido a las reglas del mercado y enmarcado en el ejercicio pleno de los derechos humanos.

---

## TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CRISIS ESTRUCTURAL

Es imposible hablar de transición energética sin abordar la crisis estructural, sistémica, global y de carácter extraordinario en la que nos encontramos. No se manifiesta de forma homogénea, como tampoco lo serán sus consecuencias y persistencia en cada región. Situación que obliga a que esta realidad sea parte de las acciones de gobiernos y de la construcción de alternativas desde la sociedad.

Por una parte, la crisis resultante del fin de super-ciclo de las materias primas que ya antes de la pandemia afectaba los ingresos, las expectativas de desarrollo y la economía de los países de ALC, con economías reprimarizadas resultado de su especialización en la exportación de *commodities*, alcanza una situación extrema con la reducción o paralización de las actividades económicas en el mundo. ALC es una de las regiones más golpeada por la pandemia que profundiza y acelera la crisis.

La crisis ecológica también está presente y la vemos en la pérdida de biodiversidad, la destrucción de ecosistemas, afectación de ecoregiones y posiblemente su mayor expresión en los últimos tiempos sea la pérdida de hábitats naturales y los resultados del manejo inescrupuloso de animales silvestres o el manejo de animales en las grandes granjas industriales, que están entre las principales causas de epidemias en los últimos años y también de la crisis sanitaria de COVID-19.

La crisis climática ya alertada hace más de dos décadas, se manifiesta hoy con eventos extremos, inundaciones y sequías que generan crisis en la producción de alimentos, escasez de agua en muchas regiones y en otros casos devastación de regiones, profundizando la pobreza y la desigualdad. La crisis ambiental que se expresa no solo en la degradación y destrucción ambiental, es aún más evidente en los conflictos sociales, desigualdades socioeconómicas y desplazamientos o migración forzada e inducida, relacionada con la destrucción de medios de vida y de condiciones ambientales mínimas para la supervivencia de poblaciones rurales, comunidades y poblaciones indígenas; también en el crecimiento de zonas periféricas de las ciudades, en las luchas en defensa de mejores condiciones de vida de poblaciones afectadas por proyectos vinculados a las industrias extractivas y otras actividades, a lo que se suma la reducción de los requisitos ambientales y sociales por parte de los gobiernos con el fin de obtener mayores ganancias, dejando de lado sus obligaciones en términos de respeto pleno a los derechos humanos. Lo señalado genera el aumento de la conflictividad en ALC resultado del rechazo social a políticas y proyectos vinculados a la extracción de petróleo, gas, minerales, explotación maderera, construcción de infraestructura y expansión de la frontera agroindustrial.

La crisis política Latinoamérica marca un posible fin de ciclo de los gobiernos progresistas. Se trata de una crisis que se manifiesta en muchos países con sus particularidades. En el caso de Bolivia, una crisis política de largo tiempo que podría pensarse llegó a su punto más alto el 2019 con los conflictos que determinaron la salida del gobierno del Movimiento al Socialismo y la asunción al poder de un gobierno de transición, que fue prolongando su periodo con el argumento de la pandemia. La situación en el 2020 hace prever que la crisis política en Bolivia y seguramente en otros países se mantendrá pues es resultado de la crisis de múltiples dimensiones y de cambios profundos en las sociedades.

Todos estos son factores que inciden en el camino y tiempo para avanzar hacia una transición energética.

---

## TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN BOLIVIA

Por lo señalado, analizar los caminos de una transición energética en Bolivia exige una mirada de diversos factores que están interrelacionados. Abordar la energía, obliga a conocer la matriz energética del país y la dirección de las políticas en términos de energía y su vínculo con el desarrollo. En ese marco, algunos elementos que caracterizan el modelo energético boliviano y que seguramente determinarán el rumbo de una transición energética se detallan a continuación:

a. *La producción de energía y dependencia de los ingresos de exportación de gas*

Si bien la producción energética boliviana ha tenido uno de los crecimientos más altos en la región, con una tasa anual de 10,5% del 2000 al 2014, no significa que Bolivia tenga un papel central en la producción energética de América Latina ya que solo representa aproximadamente el 3% de la producción de la energía primaria del continente. Por tanto, el objetivo de convertir al país en Centro Energético de la Región está alejado de la realidad. Esta producción nacional está concentrada en la dependencia de los combustibles fósiles, lo que representa en sí misma, un círculo perverso.

La dependencia que tiene el país de la venta de gas a Brasil y Argentina y los recursos obtenidos configuraron una nueva etapa de reprimarización del país. El 2008, el 43% de los ingresos fiscales provinieron de este sector. El 2019 estos ingresos disminuyeron drásticamente. Las proyecciones fueron que los recursos que se recibirían el 2019 de las exportaciones de gas, alcanzarían entre 25% al 30% del total de ingresos fiscales. Esta situación ha configurado una drástica disminución de la renta de las exportaciones, que es resultado de la caída de precios de las materias primas y que a su vez es un componente trascendental de la situación actual de crisis profunda que tuvo su inicio entre el 2014 y 2015.

En ese contexto, los efectos de la dependencia de este sector se hacen evidentes. Bolivia no priorizó una diversificación productiva y una serie de políticas que tienen que ver con generación de empleo, impulso a otros sectores e industrialización del país.

*b. El consumo de energía es predominantemente fósil*

El 83% del total de energía consumida en Bolivia es de origen fósil y derivados de hidrocarburos, el porcentaje restante es energía renovable, esencialmente hidroeléctrica con una participación en un porcentaje muy pequeño de energía eólica, solar y también biomasa. El consumo de energía se concentra en el sector de transporte, que alcanza al 42% del total e involucra al transporte dentro de las ciudades y el transporte de mercancías de importación y exportación. Este dato es importante, porque el parque automotor, además de ser responsable del consumo de energía de origen fósil, es responsable de la generación de contaminantes que se emiten a la atmósfera.

Por otra parte, la apuesta de producción de etanol y biodiesel que tienen como fin principal el sector transporte, es un estímulo directo para acabar con los bosques y priorizar la expansión de los agronegocios. En Bolivia, de

acuerdo a la Segunda Comunicación Nacional ante la CMNUCC, el 50% de las emisiones de CO<sub>2</sub> corresponden al cambio de uso de la tierra.

En cuanto al consumo residencial, el crecimiento de la demanda tiene relación con la política de acceso a energía a partir de la construcción y extensión de redes de gas para el consumo interno. De acuerdo a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), hasta finales del 2019, las conexiones de gas natural alcanzarían a 1.000.555. YPFB señala que esta política contribuye al cambio de la matriz energética y fomenta el uso masivo del gas natural en el sector doméstico, comercial e industrial.

*c. En las políticas sectoriales predomina la visión exportadora y una economía rentista*

La generación de electricidad en Bolivia depende del gas, alrededor del 71% de la electricidad es generada por termoeléctricas, 23% es de hidroeléctricas, y biomasa, energía solar y eólica constituyen el saldo restante.

**El consumo de energía se concentra en el sector de transporte, que alcanza al 42% del total e involucra al transporte dentro de las ciudades y el transporte de mercancías de importación y exportación.**

Las políticas del sector energético continúan priorizando la exportación de gas a los mercados de Brasil y Argentina, adicionalmente, tienen una dirección importante hacia la exportación de electricidad. En ese sentido, la oferta de electricidad de las termoeléctricas está por encima del 100% de la demanda actual del país. Por otro lado, la política del sector se expresa en los planes de gobierno de generar progresivamente entre 8 a 12 mil MW a partir de proyectos de megacentrales hidroeléctricas en la Amazonia boliviana y en regiones de bosques tropicales. Estos planes avanzan sin considerar las profundas transformaciones en los territorios que generan estos proyectos, la destrucción de la naturaleza, reconfiguración del espacio y las relaciones sociales existentes, son generadores de emisiones por deforestación, por la operación de las centrales, como también por las nuevas formas de ocupación por actividades económicas que difícilmente tienen que ver con preocupaciones por el calentamiento global.

Este panorama de la producción y consumo de energía en Bolivia, nos lleva a preguntarnos ¿cuáles son las posibilidades y cuales podrían ser los caminos de una transición energética?

---

## ALGUNOS ELEMENTOS A CONSIDERAR

- El modelo energético boliviano es determinado por las pautas de producción y consumo dependiente de la renta de la exportación de recursos naturales, configurando hasta ahora el “modelo de desarrollo” del país. La dependencia de los recursos de la exportación de gas y sus resultados hasta ahora nos obliga a pensar en la necesidad urgente de acciones planificadas y concertadas con la sociedad para la definición de políticas sustentadas en información confiable y de conocimiento público, que sea debatida ampliamente y que involucre la participación informada y en especial el diálogo con actores generalmente excluidos pero que son los receptores de los efectos adversos de la planificación actual. Se trata, por tanto, de superar políticas rentistas y el régimen de exportación de recursos naturales, a políticas con una visión de transformación gradual de esta dependencia y el impulso a otros sectores productivos.
- En Bolivia y ALC el actual sistema energético se caracteriza por su carácter restrictivo a la información y la inexistencia de espacios para la

participación ciudadana efectiva a nivel de políticas energéticas, planes y proyectos. Esto significa, la reducción y hasta eliminación de espacios democráticos que imposibilitan las decisiones, de quienes viven en el territorio, sobre los usos de este. Enfrentar la transición energética, significa abordar la gobernanza en el sector energético, que se ha caracterizado por ser responsable de los mayores impactos socio ambientales negativos y la generación de conflictos sociales bajo los argumentos de las necesidades de crecimiento económico y beneficio para el país, y que a su vez implica regiones sacrificadas, población desplazada y empobrecida, y crecimiento de la desigualdad.

- Avanzar en una transición energética en Bolivia implica cambio en la dirección de las políticas públicas que sustentan el modelo económico vigente dependiente de la exportación de gas, minerales, electricidad y soya. Se trata de planificar el cambio en las políticas del sector y de la matriz energética en sus componentes de producción, transformación y consumo hacia un modelo que no reproduzca las desigualdades sociales y ambientales del modelo actual.
- La transición energética global y el auge en el mundo de las energías renovables y alternativas, no puede significar para Latinoamérica y Bolivia otra etapa de reprimarización de nuestras economías y solo el cambio o la suma de nuevos recursos naturales a la exportación, como son los minerales estratégicos (litio, cobre, tierras raras). Abordar la transición energética en ALC significa cuestionar el modelo actual de apropiación de la naturaleza y su alcance es mayor que el avanzar en tecnologías y formas de generación más sustentables. Se trata de abordar el desafío desde lo local, las comunidades y pueblos y lo nacional y regional para evitar reproducir las desigualdades sociales y ambientales del modelo actual, y ser una verdadera alternativa para el desarrollo y la lucha contra el cambio climático.

## EL RESCATE DEL SECTOR ENERGÉTICO EN MÉXICO A COSTA DE LAS RENOVABLES

*Francisco Reynoso Arreola*

*Investigador del Programa de Territorio, Derechos y Desarrollo*

*FUNDAR, CENTRO DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN*

*México*

### EL FORTALECIMIENTO DE PEMEX EN UN CONTEXTO DE MENOS PETRÓLEO

La política energética en México del actual Gobierno se ha desarrollado en torno a la idea de que el sector energético debe ser “rescatado”. Esta idea deriva principalmente del hecho de que, durante la administración pasada, y pese a la reforma energética que permitió la participación de las empresas privadas en el sector, México se ha convertido en un importador de energía.

Históricamente asumido como un país petrolero por haber contado con uno de los yacimientos más grandes del mundo (Cantarell), México produce cada vez menos petróleo. En 2004, alcanzó su pico de producción cuando extrajo un promedio de más de tres millones de barriles de petróleo crudo por día (mbd). Desde ese entonces, y en tan sólo 15 años, la plataforma petrolera mexicana ha descendido vertiginosamente hasta alcanzar casi la mitad de esa producción: 1.7 mbd.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 (PND), el rescate del sector energético es necesario ya que, debido a la reforma energética impuesta por el régimen anterior, se causó un daño gravísimo a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En este sentido, el PND considera que un propósito de importancia estratégica para la presente administración es el rescate de Pemex y la CFE para que vuelvan a operar como *palancas estratégicas del desarrollo nacional*. Por consecuencia, este Gobierno estableció como prioritario, en materia de política energética:

- rehabilitar las refinerías existentes, que se encuentran en situación de abandono y saqueo;
- construir una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, y
- modernizar las instalaciones generadoras de electricidad propiedad del

Estado, particularmente las hidroeléctricas, ya que algunas operan con maquinaria de 50 años y producen, en general, muy por debajo de su capacidad.

Ambas empresas recibirán recursos extraordinarios para la modernización de sus respectivas infraestructuras y se revisará sus cargas fiscales y, por ello, para seguir revirtiendo el deterioro de Pemex y de la CFE, se les hizo un incremento real de 8.8% y 1.4%, respectivamente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.<sup>10</sup>

Por otro, lado, en materia de transición energética, el PND se planteó como objetivo (3.5.8) “Fomentar la generación de energía con fuentes renovables y tecnologías sustentables, y coadyuvar a la reducción de las emisiones del sector energético, promoviendo la participación comunitaria y su aprovechamiento local, así como la inversión”. Para ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró en su plan de rescate del sector energético, una inversión adicional de 20 mil millones de pesos al presupuesto de la CFE para la rehabilitación de las hidroeléctricas. Por el momento, la inversión y promoción de las energías solar, eólica y geotérmica se encuentran actualmente en un impasse.

---

## **PANDEMIA, CRISIS PETROLERA Y AUN ASÍ EL GOBIERNO APUESTA POR MÁS HIDROCARBUROS**

En febrero de 2020, el mundo recibía la noticia que todos los ambientalistas estaban esperando: el cierre de la economía mundial derivado de la pandemia de la COVID-19 estaba teniendo impactos positivos en la atmósfera. El cierre parcial de la economía china provocó que sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se redujeran una cuarta parte<sup>11</sup>, contribuyendo de manera fortuita al combate contra la crisis climática.

La reducción de la demanda de hidrocarburos del segundo país que más los consume<sup>12</sup> provocó que el mercado se inundara de una mercancía que, confor-

---

10 <https://politica.expansion.mx/mexico/2019/11/22/20-datos-del-presupuesto-2020>

11 <https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter>

12 <https://www.statista.com/statistics/271622/countries-with-the-highest-oil-consumption->

me avanzaba la pandemia, cada vez menos países necesitaban. Esto generó una caída en las cotizaciones de todas las mezclas mundiales. Para estabilizar los precios, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) intentó entablar un diálogo con Rusia para determinar los recortes necesarios de producción de petróleo en medio de la pandemia de coronavirus, pero las negociaciones no avanzaron rápidamente y los precios del petróleo ya habían caído un 30% desde el comienzo del año. La participación de México en estas negociaciones fue ampliamente criticada por un sector amplio de la sociedad, pues no estuvo dispuesto a recortar el 24% de su producción como el resto de los miembros del OPEP+ y sólo redujo el 6%, aproximadamente 100 mbd.

La caída de los precios fue una de las causas del colapso del mercado de valores global el 9 de marzo de 2020, conocido coloquialmente como *Black Monday*. Se generó una pandemia de petróleo, pero sin compras de pánico a pesar de que los precios de los barriles rebasaron la línea cero. La mezcla mexicana se llegó a cotizar en -2.37 USD por barril.<sup>13</sup>

Si bien es cierto que todas las mezclas mundiales sufrieron caídas históricas, no todos los países respondieron de la misma manera. Canadá, por ejemplo, detuvo su única refinería porque el precio de su crudo y la demanda esperada de sus derivados no les estaba siendo rentable. Así que su única opción racional fue parar operaciones, no aumentarlas.<sup>14</sup>

En cambio, en México, sigue en pie el controversialísimo proyecto de la construcción de la refinería de Dos Bocas. Si nunca satisfizo cómo se gestionaron su construcción y los permisos necesarios para ello; el dinero que se le ha invertido para seguir reproduciendo un modelo fósil a costa del medio ambiente; así como su supuesta rentabilidad económica, hoy se cuestiona también su pertinencia frente a la crisis económica.<sup>15</sup>

Pero, el Gobierno de la autollamada Cuarta Transformación (4T) sigue sin replantearse genuinamente la viabilidad, al menos momentánea, de la nueva refinería que se estima contribuya a la capacidad de refinación de Pemex en 340

---

[in-2012/#:~:text=The%20United%20States%20and%20China,million%20barrels%20per%20day%2C%20respectively.](#)

13 <https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Crudo-mexicano-y-WTI-con-precios-negativos-en-futuros-20200420-0150.html>

14 <https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/come-by-chance-refinery-shutting-down-1.5514499>

15 <https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/2395/el-proyecto-de-refineria-en-dos-bocas-no-cuenta-con-la-autorizacion-de-impacto-ambiental-que-requiere-para-iniciar-las-obras/>

miles de barriles diarios (Mbd) para 2022. El costo de este proyecto estratégico para la 4T es de más de ocho mil millones de dólares.<sup>16</sup>

El proyecto de la nueva refinería de Dos Bocas ha estado en el discurso del Gobierno electo desde que estuvo en campaña. Actualmente, la inversión y la necesidad de su construcción están reconocidas en los principales instrumentos de política pública en materia de energía: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Programa Sectorial de Energía (Prosener) y el Plan de Negocios de Pemex; así como en el Presupuesto de Egresos de la Federación, donde cuenta con una partida exclusiva.<sup>17</sup>

Hoy, la preocupación es doble, ya que el Gobierno no sólo está dispuesto a aumentar su contribución de emisiones de gases de efecto invernadero en un contexto de crisis climática y con metas ambientales que cumplir, sino que no tiene recursos suficientes para hacer frente a la pandemia con un paquete económico que permita revertir la otra crisis, la sanitaria. Un par de meses previos a la cuarentena, México cerró el 2019 con una desaceleración en

**México cerró el 2019 con una desaceleración en la cual se contrajo su economía 0.1%, respecto al crecimiento previo de 2.1%. Esto colocó a México como el país con peor desempeño económico de las 20 economías más grandes del mundo.**

la cual se contrajo su economía 0,1%, respecto al crecimiento previo de 2,1%. Esto colocó a México como el país con peor desempeño económico de las 20 economías más grandes del mundo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).<sup>18</sup> Hoy, con la pandemia de la COVID-19 todavía vigente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que México va a tener en desplome del 10.5% de su PIB en 2020.<sup>19</sup> El futuro, al menos cercano, se ve con poca demanda de hidrocarburos y, aún así, el Gobierno insis-

16 <https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Paginas/default.aspx>

17 [https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/52/r52\\_t9m\\_pie.pdf](https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/52/r52_t9m_pie.pdf)

18 <https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/03/12/mexico-con-el-peor-crecimiento-de-2019-ocde-4981.html>

19 <https://www.forbes.com.mx/economia-finanzas-economias-latinoamericanas-sufriran-mayor-contraccion-segun-el-fmi-mexico-lidera-lista/>

te en gastar ingentes cantidades de recursos para seguir explotando un recurso cuyo mercado es en extremo volátil.

Es con este escenario que, no sólo los ambientalistas, sino una amplia sociedad civil, han demandado al Gobierno en turno que se cancele el proyecto de la refinería de Dos Bocas para destinar esos recursos al combate de la pandemia. Sin embargo, el proyecto no paró y la actividad se consideró como esencial.

En cambio, en su plan para enfrentar la crisis sanitaria y económica que se registra a nivel mundial debido a la pandemia y a la caída en los precios del petróleo, el Gobierno de la actual administración propuso, entre otras cosas, una serie de acciones encaminadas a la “austeridad republicana”:<sup>20</sup>

1. Reducir el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25% y los altos funcionarios públicos (de subdirector hasta presidente de la República) no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año.
2. Recortar el 75% de presupuesto disponible de partidas de servicios materiales y suministros, esto también incluye a los supuestamente comprometidos.
3. Cancelar 10 subsecretarías (aunque no informó cuáles), garantizando el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos.
4. Cerrar la mitad de las oficinas con excepción de las que atiendan de manera directa al público y a aquellas que se consideren esenciales para el beneficio de la gente.
5. Posponer el gasto del Gobierno con excepción de las pensiones; los Programas insignia, y los proyectos estratégicos como la rehabilitación de las seis refinerías existentes y la construcción de la refinería de Dos Bocas.
6. Extinguir los fideicomisos que no cuenten con estructura.

Sobre este último punto se dijo, por ejemplo, que se ahorrarían hasta 150 mil millones de pesos con los que se buscará fortalecer los programas sociales para proteger a la población más pobre; ayudar a la reactivación económica, de los créditos y todo lo que se oriente a impulsar la industria de la construcción; pero también fortalecer el apuntalamiento de Pemex ante la caída de los pre-

<sup>20</sup> <https://www.sinembargo.mx/03-04-2020/3760880>

cios del petróleo a nivel internacional y el pago de deuda, concepto al que se destinarán la mayoría de los recursos “porque no queremos que se incremente la deuda”.<sup>21</sup>

Como colofón, preocupa que entre los fideicomisos que se pretende extinguir se encuentren algunos que buscan garantizar derechos humanos como el Fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, los fondos para la protección de desastres naturales y los fondos de investigación y desarrollo científico. Como señaló Fundar anteriormente, las reformas propuestas en la iniciativa pueden incrementar la vulnerabilidad y el riesgo en el que ya se encuentran las personas defensoras y periodistas en México; así como poner en riesgo la capacidad de reacción del Estado cuando se presente algún desastre natural. Las políticas de austeridad y ahorros para asegurar medidas de salud o mitigar el impacto económico, no deben de realizarse en detrimento de la garantía de otros derechos.<sup>22</sup>

---

## MÉXICO Y SU RETRASO EN LA TRANSICIÓN

México es parte del compromiso climático. El 14 de septiembre de 2016, los senadores mexicanos ratificaron el Acuerdo de París, luego de que el día anterior las diferentes comisiones de la cámara alta del Congreso de México aprobaran el dictamen<sup>23</sup>. Respecto a nuestra contribución nacionalmente determinada (NDC, por sus siglas en inglés), México adquirió dos compromisos:

- Una reducción **no condicionada** de 25% de nuestras emisiones de GEI y de contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), que corresponden al 22% de GEI y 51% de carbono negro; y
- Una reducción de las emisiones del sector industrial mediante la generación del 35% de energía limpia en el 2024 y 43% al 2030.

Estos compromisos quedaron estipulados en la normatividad local, ya que fueron posteriormente adheridos a la Ley General de Cambio Climático (LGCC). En el Segundo Transitorio de dicha ley se especifica que la reducción

---

21 <https://www.sinembargo.mx/03-04-2020/3760880>

22 <https://fundar.org.mx/la-extincion-de-fideicomisos-sin-analisis-profundo-podria-poner-en-riesgo-la-garantia-de-derechos-humanos/>

23 <https://www.onu.org.mx/senado-de-mexico-ratifica-el-acuerdo-de-paris-sobre-cambio-climatico/>

del 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero se conseguirá a través del compromiso de los diferentes sectores participantes, cumpliendo las metas siguientes: transporte -18%; generación eléctrica; -31%; residencial y comercial; -18%; petróleo y gas; -14%; industria; -5%; agricultura y ganadería -8%, y residuos -28%.

Además, este compromiso asumido como contribución determinada a nivel nacional implica alcanzar un máximo de emisiones al año 2026 y desacoplar las emisiones de gases de efecto invernadero del crecimiento económico para que la intensidad de emisiones por unidad de producto interno bruto se reduzca en alrededor de 40% entre 2013 y 2030.

Para cumplir con este objetivo, la Secretaría de Energía fijó como meta una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica del 25% para el año 2018, del 30% para 2021 y del 35% para 2024, la cual quedó establecida en la Ley de Transición Energética en su artículo Tercero Transitorio.

Sin embargo, hoy México no cumple ni siquiera con la primera meta establecida de participación de energías limpias en la matriz energética. De acuerdo con el último Reporte de Avance de Energía Limpias (Primer Semestre 2018) la participación de las energías limpias y renovables fue de 6,83% y 17,29%, respectivamente, dando un total de 24,12%. Dado que el Gobierno actual no ha publicado el segundo Reporte de Avance del 2018, la ciudadanía mexicana no puede saber si hemos cumplido o no como país la primera meta.

El futuro de las renovables en México se complicó aún más el 29 de abril de 2020 cuando, en el contexto de la pandemia, el Centro Nacional de Control de la Energía (Cenace) emitió el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”.

En el Acuerdo se planteó la necesidad de atender problemas operativos que surgieron en el despacho de energía eléctrica por los cambios en el mercado eléctrico debido a la pandemia. El Cenace decretó “acciones estratégicas de control operativo para fortalecer la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional” principalmente por fallas ocurridas en el sistema como resultado del bajo consumo eléctrico por la emergencia sanitaria y por la generación intermitente con energía renovable. No obstante, el documento fue ampliamente criticado tanto

por organizaciones de la sociedad civil ambientalistas como empresariales, al ser interpretado como un instrumento que podría detener la incorporación de nuevas centrales eólicas y solares privadas, al suspender las pruebas preoperativas.

En el fondo el problema que yacía era que, efectivamente, por la menor demanda de energía, tanto la CFE como Pemex, tenían que darle salida de alguna manera al carbón y el combustóleo de la refinación que se estaban acumulando. Una decisión que contravenía con los contratos de las empresas eólicas y solares que ya habían invertido más de seis mil cuatrocientos millones de dólares.<sup>24</sup>

La pandemia no sólo no revirtió el fortalecimiento del modelo fósil, como en otros países, sino que lo está fortaleciendo. La pandemia, como dijo el presidente, “nos vino como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación”, donde el petróleo sigue siendo visto como la palanca de desarrollo.<sup>25</sup>

---

24 <https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/empresas-energia-solar-eolica-cenace-asolmex/>

25 <https://aristeguinoticias.com/0204/mexico/esto-nos-vino-como-anillo-al-dedo-para-afianzar-el-proposito-de-la-transformacion-lopez-obrador-enterate/>

## PUBLISH WHAT YOU PAY Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA<sup>26</sup>

*Clancy Moore<sup>27</sup>*

*Directora nacional*

*Publish What You Pay (PWYP)*

*Australia*

“Un crudo despertar” es el título del informe que Global Witness realizó en 1999 y dio origen a [Publish What You Pay](#)<sup>28</sup> en 2002. El Informe se centró en el saqueo de los bienes del Estado, detallando cómo mujeres y hombres de Angola sufrían y eran sistemáticamente abusados a favor de beneficios empresariales y el lucro personal. El informe implicaba a grandes multinacionales contaminantes como la francesa Elf Aquitaine, la británica BP-Amoco y las estadounidenses Chevron y Exxon/Mobil, junto con turbios préstamos multimillonarios de la banca privada y empresas de inversión, mientras estafaban a comunidades entrando en total contradicción con sus demandas de responsabilidad y transparencia corporativa.

### UN RÁPIDO SALTO AL AÑO 2020

[PWYP](#) tiene más de 700 miembros y 49 coaliciones nacionales, incluyendo a [PWYP Australia](#), la cual lidero con orgullo. Ahora la transparencia financiera se ve como una norma global en el sector extractivo. Cincuenta y cuatro países han firmado la Iniciativa para la [Transparencia de las Industrias Extractivas](#), (EITI por sus siglas en inglés), una iniciativa voluntaria mundial que exige información sobre los pagos a los gobiernos para las operaciones extractivas nacionales. Entre ellos figuran Colombia, Perú, Guyana, Surinam y Argentina. En los países que albergan las sedes de muchas de las compañías mineras, gasí-

26 Compilado por y basado en el Documento de Transición Energética preparado por los miembros de PWYP en 2020. Este documento es el resultado de nueve meses de consultas, seis webinars, 64 respuestas a encuestas y más de 300 aportes diferentes

27 Clancy vive y trabaja en el territorio del pueblo Wurundjeri de la nación Kulin, en Melbourne (Australia) y reconoce a sus habitantes como los propietarios tradicionales de la tierra.

28 <https://www.pwyp.org/about/>

feras y petroleras del mundo, también existen leyes que obligan a las empresas a “publicar lo que pagan” a nivel de país y de proyecto. Estas leyes existen en el Reino Unido, en toda la Unión Europea, Canadá, Noruega, Suiza, mientras que en los Estados Unidos se están debatiendo estas leyes en la actualidad. Desde 2014, 913 empresas de todo el mundo han divulgado sus [datos de ingreso](#) en virtud de estas leyes.

A pesar de estos avances en cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas a escala mundial, todos nos encontramos en otro “duro despertar” con la urgente necesidad de una transición energética justa y equitativa que se sustente en la transparencia.

Como ya hemos visto, el COVID-19 ha estado cambiando nuestra forma de vida, al replantear los debates sobre políticas y transformar los mercados de productos y servicios. Las comunidades se enfrentan ahora al COVID-19, a la recesión económica y a los impactos de la crisis climática. En ese sentido, ahora más que nunca debemos unirnos para enviar un fuerte mensaje a nuestros gobiernos sobre el mundo que queremos para nuestros niños y nuestras comunidades.

Como Publish What You Pay, necesitamos delinear nuestra visión para la transición de energía que determine un futuro mejor para todos.

En el Acuerdo de París de 2015 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), las naciones acordaron limitar el calentamiento global a 1,5 - 2 grados centígrados con el fin de evitar los impactos más devastadores del cambio climático. Tal reducción implica que las emisiones antropogénicas netas de CO<sub>2</sub> en el mundo deben disminuir alrededor de un 45% con respecto a los niveles de 2010 para el año 2030, alcanzando el cero neto el 2050. Es fundamental que se desarrolle una rápida transición a la energía renovable limpia y una disminución controlada de los combustibles fósiles. Sin embargo, los compromisos actuales nos conducirán a un calentamiento de 3 grados, creando condiciones inhabitables para los humanos en menos de cien años.

Por tal razón, debemos eliminar gradualmente las mayores fuentes de emisión, concretamente, las emisiones relacionadas con los combustibles fósiles. [En el informe](#) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) de 2019, se afirma que la producción mundial de petróleo y gas debe caer en un 40% durante la próxima década para evitar los peores impactos del cambio climático. Como señala un informe realizado el año 2016 por

varias organizaciones de la sociedad civil, “las potenciales emisiones de carbono provenientes del petróleo, gas y carbón de los *yacimientos y minas que operan actualmente* en el mundo nos llevarían más allá de los 2 grados centígrados de calentamiento”. Esto significa que no sólo debemos eliminar progresivamente muchos proyectos existentes, sino también evitar los planes de la industria para nuevos proyectos.

Al mismo tiempo, necesitamos que los gobiernos diversifiquen sus economías e inviertan estratégicamente en nuevas fuentes de energía y en nuevas industrias con el fin de mantener los flujos de ingresos y, simultáneamente, proteger a las personas en esta transición. Las comunidades de los países ricos en minerales del Sur Global deben reservarse el derecho a oponerse a nuevos desarrollos mineros o a compartir los beneficios de la extracción que conlleva la transición a la energía limpia.

Es por ello que debemos administrar concienzudamente el declive de la producción de combustibles fósiles a partir de ahora. Los países más ricos y con altas emisiones históricas deben ser los primeros en actuar.

---

## ¿QUÉ ES LO QUE NOS IMPIDE LOGRARLO?

A pesar del consenso que existe sobre la necesidad de reducir drásticamente la extracción de combustibles fósiles, en realidad la industria busca *expandir* la producción en los próximos 20 años. Lamentablemente, los gobiernos de los países más ricos del mundo se muestran muy interesados en colaborar con esta sobreproducción. Según [Global Witness](#), estos planes de expansión se encuentran bastante enfocados, ya que un impactante 61% de la nueva producción de petróleo y gas provendrá de los Estados Unidos, un 7% de Canadá y el resto de diferentes partes del mundo.

Aunque muchos gobiernos alrededor del mundo se han comprometido a enfrentar el cambio climático, sus políticas y acciones demuestran su falta de voluntad para lograrlo efectivamente. En varios países esto se debe al poder político de la industria de los combustibles fósiles. En países como Estados Unidos, Australia y Canadá, la industria de los combustibles fósiles ha captado a legisladores y entes reguladores a nivel nacional, estatal y local, con el fin de impedir cualquier acción agresiva que restrinja la actividad industrial. En

su lugar, los funcionarios gubernamentales siguen brindándole a la industria un sinnúmero de prebendas que van desde la aprobación de regímenes fiscales débiles, hasta políticas fiscales regresivas que permiten la evasión del impuesto por parte de las corporaciones, así como una serie de subvenciones específicas para el sector.

Además, a fin de lograr los progresos necesarios para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, primero debemos abordar la toma política y la corrupción vinculada con los combustibles fósiles en aquellos países ricos en recursos como Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Australia, Indonesia y Nigeria.

---

## **¿QUÉ PAPEL PUEDE DESEMPEÑAR PUBLISH WHAT YOU PAY?**

En los últimos 10 años, las más de 700 organizaciones pertenecientes a PWYP han acumulado una importante experiencia para comprender los impactos fiscales de los proyectos de petróleo, gas y minería, desde el análisis de los contratos hasta la exigencia de una mayor transparencia de los ingresos de estas industrias. Dada la gran experiencia en la promoción de la transparencia de los ingresos y los conocimientos técnicos, las coaliciones de PWYP tienen un papel fundamental que desempeñar para informar y apoyar las medidas climáticas urgentes. Los miembros deben unirse para documentar todas las formas esfuerzos existentes para garantizar la buena gobernanza, pueden informar las discusiones sobre la acción climática (incluidos aquellos relacionados con la justicia fiscal y los derechos de la mujer, así como la propiedad efectiva y la transparencia contractual); y para esbozar las principales divulgaciones y datos que el movimiento podría promover a fin de brindar a los ciudadanos alrededor del mundo la información necesaria para exigir una transición justa.

PWYP está más que preparado para apoyar la labor en estos temas debido a nuestro trabajo de muchos años sobre el nexo entre la corrupción, la extracción de recursos y la transparencia fiscal. De hecho, el enfoque en este nexo preciso llevó al origen de la red global inicialmente. Los miembros de PWYP tienen un profundo y extenso conocimiento de los efectos corruptores de los sectores extractivos y de las herramientas que emplea la industria para obtener poder político, construir una legitimidad pública basada en falsas narrativas, y maximizar su beneficio.

El movimiento más amplio, que gira en torno a la justicia climática, incluye grupos que trabajan en el cambio climático, el poder corporativo y la justicia económica, pero son pocos los grupos que trabajan en la intersección de estos tres problemas. En este sentido, PWYP viene a desempeñar un papel importante ayudando a reunir estos grupos, siendo un facilitador entre y dentro de los movimientos. Por ejemplo, los grupos climáticos y los grupos anticorrupción no siempre están conectados entre sí. PWYP puede ayudar a facilitar la colaboración entre estos movimientos con el objetivo de avanzar hacia la promoción de la transparencia y combatir el poder político corporativo.

PWYP, como movimiento enraizado en la transparencia como herramienta clave que garantice la justicia de los recursos naturales, puede contribuir en gran medida a través de la promoción coordinada y eficaz a nivel mundial y nacional de una mayor divulgación tanto de las empresas como de los gobiernos. PWYP debe explorar las nuevas formas de divulgación necesarias para permitir la participación ciudadana en los procesos de elaboración de políticas que afectan sus vidas hoy y en el futuro, a medida que avanzamos hacia una transición energética mundial que tendrá repercusiones diversas y de gran alcance, incluidos nuevos y complejos desafíos en materia de equidad.

Reconocemos que un movimiento mundial sólido y diverso ha contribuido con este progreso mediante una lucha de décadas por la justicia climática, ambiental y económica. Es así como PWYP espera sacar provecho de nuestros puntos fuertes y nuestra experiencia colectiva para contribuir eficazmente con este movimiento mundial de forma que se ajuste a nuestra misión. Para ello, buscamos progresar en el trabajo en tres áreas clave:

- *Poder político corporativo y gobernanza:* A pesar de que la apabullante opinión pública apoya la eliminación de los combustibles fósiles, muchos gobiernos continúan ayudando y fomentando la expansión de la industria. Debemos abordar la corrupción y el poder político corporativo por parte de la industria de los combustibles fósiles y asegurarnos de que este poder político no continúe con la transición a la energía limpia.
- *Financiamiento y justicia económica para una transición energética equitativa:* Debemos trabajar para revertir estas políticas que inflan innecesariamente las ganancias de la industria, privan a los gobiernos de ingresos tan ne-

cesarios e incentivan la producción continua. Los países del Sur Global deben cosechar los beneficios de la transición energética y no quedarse cortos otra vez.

- *Transparencia y participación pública.* La transparencia es un paso importante para el empoderamiento de los ciudadanos a participar activamente en las discusiones, debates sobre políticas y la promoción en materia de la gobernanza de sus recursos naturales a lo largo de la transición energética. Debido a esta fuerte oposición, la industria y sus agentes políticos intentan limitar las vías de participación y protesta cívica. Debemos seguir defendiendo, luchando para ampliar y prevenir los ataques contra el espacio cívico en todo el mundo y trabajar para proteger los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas y otros grupos marginados, quienes son los objetivos más comunes.

A continuación, presentamos las **cinco posiciones** que el Consejo Global de PWYP – un “comité” representativo - discute en su reunión de septiembre.

1. PWYP cree que un declive controlado de la producción de combustibles fósiles, es necesario. Esto incluye tanto el cese inmediato de toda exploración, desarrollo y producción de combustibles fósiles en ciertos países, así como la eliminación gradual de la producción de combustibles fósiles existente en otros países del mundo con el paso del tiempo.
2. Creemos que la eliminación gradual de la exploración, el desarrollo y la producción de combustibles fósiles debe ser dirigida por aquellos países que históricamente han contribuido en mayor medida con las emisiones mundiales, mediante la aprobación y aplicación de ambiciosas políticas de eliminación gradual, así como la adhesión a los puntos de referencia convenidos internacionalmente. Además, esos países deben brindar apoyo financiero para que los planes de adaptación, mitigación y transición en los países en desarrollo sean justos y equitativos.
3. Los trabajadores de las industrias extractivas deben tener protegidas sus condiciones económicas de vida durante la transición energética. Alentamos a todos los países a que sigan planificando la transición energética, ya que la dependencia económica de la producción de combustibles fósiles en el largo plazo es cada vez más arriesgada y es probable que dé

lugar a dificultades económicas para los trabajadores y las comunidades, regiones y naciones que dependen de los combustibles fósiles.

4. Con la transición energética ya en marcha, exigimos que se protejan los derechos de las comunidades históricamente marginadas. Esto incluye a los pueblos indígenas, las mujeres y las comunidades afectadas por la minería que han sufrido los peores impactos de la extracción de recursos. Los gobiernos y las empresas deben rendir cuentas por estos impactos ahora y en el futuro.
5. PWYP reconoce que las industrias extractivas han provocado con frecuencia un aumento de las tasas de desigualdad y pobreza en los países ricos en recursos y que, a menudo, han tenido impactos adversos diferenciados en función del género en las personas que viven en las comunidades circundantes, especialmente las comunidades indígenas. La necesidad urgente de la transición energética no debe utilizarse como justificación para anular o dejar de lado la participación de los ciudadanos, el consentimiento de la comunidad y las sólidas custodias de la gobernanza. Por el contrario, deben respetarse y protegerse los derechos de las comunidades en la extracción de minerales y el desarrollo de nuevos proyectos de energía renovable si se quiere que la transición sea verdaderamente justa.

Puedes leer más sobre el trabajo que realiza PWYP en la transición energética [aquí](#).

La RLIE está conformada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil latinoamericana, contribuye a la construcción de visiones y acciones alternativas al actual modelo de desarrollo dependiente de las industrias extractivas, que vulnera derechos de las personas y de la tierra.

La integran el Centro Fundar de México; Congcoop de Guatemala, Foro Nacional por Colombia, el Grupo Faro y el CDES de Ecuador, IBASE de Brasil; el Grupo de Propuesta Ciudadana, CooperAccion y DAR de Perú, Terram de Chile, la Fundación Jubileo y CEDLA de Bolivia.



CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL  
DESARROLLO LABORAL Y AGRARIO

[www.cedla.org](http://www.cedla.org)  
[info@cedla.org](mailto:info@cedla.org)

Achumani, Calle 11, N° 100  
entre Av. García Lanza y Av. Alexander  
T: 591 2 279 4740 | 591 2 279 9848  
La Paz - Bolivia